

24 de la Constitucion de la República Vistas las constancias de autos, y

Considerando: que al imponerles una multa la prefectura de Distrito de Mazatlan, en uso de sus atribuciones gubernativas, lo hizo bajo el supuesto de que la falta cometida por los quejosos estaba sometida á su jurisdiccion: que en virtud de la averiguacion practicada posteriormente, se trató de la averiguacion de un verdadero delito, cuyo exámen está cometido á la autoridad judicial, sin que el hecho de haberles impuesto la referida multa á los peticionarios pudiera excusar á dicha autoridad de someterlos á su juez competente, dichos procedimientos no importan violacion alguna de las garantías consignadas en el artículo 24 de la constitucion de 1857, se decreta: que por sus propios legales fundamentos, es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el juzgado de Distrito de Sinaloa, en la parte que declaró, en nombre de los poderes de la Union, que la justicia federal no amparaba ni protegía á los peticionarios en las garantías á que se refieren en su escrito de demanda.

Devuélvase sus actuaciones al juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el tomo.

Así por mayoría de votos lo decretaron los C.C. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.

Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—José M. Lafragua.—Ignacio Ramirez.—M. Ausa.—S. Guzman.—Luis Velazquez.—M. Zavala.—I. García Ramirez.—Luis M. Aguilar.
—Secretario.

Son copias que certifico.—México, once de Noviembre de 1871.—*Agustín Peralta.*
—oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Pachuca por Juana García á nombre de Juan Chacon contra el jefe del cuerpo número 13 de caballería, por violacion de garantías individuales.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal en el juicio de amparo interpuesto por Doña Juana García contra el C. teniente coronel Vicente San Martin, su estado supuesto que es del alegar de buena prueba, dice: que á su entender no procede el recurso por las razones que en seguida pasa á exponer.

La solicitante, en su oficio poticionario de fecha 25 del próximo pasado, dice: que el día 21 del propio mes, como á las siete de la noche, un hombre llamado Simon Tello, abusando del estado de embriaguez en que se encontraba su hijo Juan Chacon, lo condujo al cuartel de caballería, donde fué inmediatamente consignado al servicio de las armas, con cuyo hecho halla violadas en la persona de su hijo las garantías que le aseguran los artículos 5º y 16º de la Constitucion general.

El Promotor ha examinado las constancias del expediente y de su contenido deduce lo siguiente: 1º que Juan Chacon al haber sido presentado por Simon Tello, estaba en completo estado de embriaguez, y que aunque declaró ser su voluntad servir á las armas, su dicho en esos momentos podrá relevarlo de todo compromiso, si adquirido una vez el conocimiento y recobrados en su totalidad sus sentidos, hubiera manifestado lo contrario; 2º que si en este caso se le obligase contra su voluntad á prestar trabajo ó servicio alguno, indudablemente crece el que suscribe, que proceda el amparo, por estar comprendido en la fraccion 1ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Mas es el caso: que de autos consta, que al día siguiente al en que se presentó al cuartel, fué pasado por cajas en la gefatura de hacienda, y ya en ese estado completamente de razon expresó clara y terminantemente en esa oficina ser su voluntad servir á las armas.

Fácilmente se comprenderá segun lo expuesto, que no solo no se han violado en la persona del quejoso las garantías que otorgan los artículos 5 y 16 de la Constitución, sino que ni ha ejerciéndose contra él la mas leve violencia, supuesto que su voluntad fué expresa para servir al ejército por cinco años, cuando fué interrogado por el C. oficial mayor de la gefatura de hacienda, antes de pasado por cajas y ya en su completo juicio como he manifestado. De esta declaracion constante á fojas 2 del cuaderno de prueba que corresponde al suscrito, se viene en conocimiento de que no intervino ningun acto coercitivo para obligar al hijo de Doña Juana García, y esto mismo se confirma con lo que depusieron los CC. Roque Briseño y Juan N. Lara en sus declaraciones.

Por la luz que arrojan estas pruebas reunidas, conocerá el juzgado, que Juan Chacon, en cuestion, ha tenido conocimiento y voluntad cabal para servir á las armas: que esta facultad se la garantiza el artículo 4º de la Constitución general, y por último, que no se han infringido los de la misma insertos en el escrito de solicitud.

Por estas consideraciones concluye el Promotor su pedimento que en resumen, y previo el mejor parecer del juzgado, se reduce á indicar: que la justicia de la Union, no ampara ni protege á Doña Juana García.

Pachuca, Octubre veintiseis de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado.)—*Ma-*
cedonio Sanchez.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Pachuca, Octubre treinta de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo promovido por D^a Juana García, pidiendo amparo de garantías contra la providencia del C. teniente coronel Vicente San Martin, gefe del 12 de caballeria, en virtud de la cual dió de alta en su cuerpo á Juan Chacon, hijo de la quejosa.

Considerando: que el recurso pretendo fundarse, en que están violadas las garantías que otorga la Constitución en sus artículos 5, 15 y 16, los que prohiben, el primero, los trabajos forzados y los contratos que tengan por objeto la pérdida ó el irrevocable sacrificio de la libertad; el segundo, los convenios ó tratados contra los derechos del hombre y del ciudadano, y el tercero las molestias sin causa legal inferidas en las personales ó en sus intereses.

Considerando: en cuanto al artículo 5º.

Primero; que de las declaraciones de Simon Tello y gefe de hacienda, y por la misma confesion de Juan Chacon, aparece que al pasarlo por cajas, expresó lisa y llanamente, ser su voluntad el servir en el ejército por un término fijo de cinco años, sin que en ese acto hubiese estado ébrio.

Segundo: que aunque el estado de embriaguez en que se encontraba cuando se presentó en el cuartel y cuyo estado no le privaba por completo del conocimiento, segun declaran los mismos testigos presentados por la parte interesada, podia argüir en contra del consentimiento pleno que exige el referido artículo constitucional, es indudable que ratificó su voluntad en la gefatura de hacienda al día siguiente en que estaba en su entero juicio.

Tercero; que la circunstancia de que Chacon se haya arrepentido posteriormente de servir en el ejército, no es motivo suficiente para concederle el amparo que se solicita, porque nadie puede relevarse de una obligacion lícitamente contraída, sin

consentimiento de la parte á cuyo favor se contrajo como sucede en el caso respecto de la Nacion, con quien Chacon se comprometió á prestar sus servicios;

Cuarto; que con obligar á esto á cumplir su compromiso no le ataca el referido artículo en la parte que prohíbe los contratos que tengan por objeto el irrevocable sacrificio de la libertad, porque esta disposicion se refiere á los convenios por toda la vida del hombre y no por un tiempo fijo y corto. Considerando respecto del art. 15:

Primero; que este se refiere á los tratados entre la república y otras naciones y no los contratos entre aquella y los particulares.

Segundo; que por otra parte, ninguna convencion en que una persona se obliga á prestar servicios personales ataca las garantías ó los derechos del hombre reconocidos por la Constitucion: antes por el contrario, pone en ejercicio la libertad individual que ella reconoce.

Considerando por último: en cuanto el art. 16, que con obligar á Juan Chacon á que continué en el servicio de las armas por haberse comprometido válida y lícitamente á ello, no se infiere una molestia sin causa legal, con fundamento de las disposiciones citadas se decreta:

Que la justicia de la Union no ampara ni protege á Juan Chacon, contra los actos del jefe del cuerpo del 12 de caballería C. Vicente San Martín, en virtud de los que se encuentra aquel en el servicio de las armas.

Hágase saber; compúlsense los testimonios respectivos para el Semanario Judicial y para publicarse en los periódicos, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para la revision de esta sentencia, que definitivamente juzgando pronunció el C. Lic. Miguel Mejía juez de Distrito del Estado de Hidalgo. (doy fé.)=*M. Mejía.*—*Francisco Briseño*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre trece de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Pachuca por Juana García en nombre de su hijo Juan Chacon, contra el teniente coronel C. Vicente San Martín jefe del cuerpo num. 12 de caballería, por haberlo dado de alta en el referido regimiento contra su voluntad, alegando que con dicho procedimiento se ha violado en la persona de su hijo la garantía de los artículos 59 y 16 de la Constitucion de 1857. Vistas las constancias de autos y

Considerando: que de ellas aparece, que Juan Chacon se presentó voluntariamente á prestar sus servicios en el ejército por manente: que aunque se excepciona diciendo que en esos momentos se encontraba en estado de ebriedad, aparece en los autos, que al siguiente día al ser pasado por cajas, rectificó su voluntad ante los emplados y autoridades que intervinieron en esos negocios, y que el quejoso no niega este hecho, sino que alega haberse arrepentido despues de hecho su enganche; los actos del ciudadano teniente coronel del 12 de caballería no importan violacion alguna de las garantías alegadas por la madre de el peticionario en su escrito de demanda, con tales fundamento se decreta:

Que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el juzgado de Distrito de Pachuca que negó el amparo á la quejosa que lo solicitó en nombre de su hijo Juan Chacon.

Devuélvase sus actuaciones al juzgado de donde proceden con testimonio de este auto para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos respecto del primer punto, y por mayoría respecto del segundo, los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal

pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Gara.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M^a Aguilar,* secretario.

Son copias que certifico. México, Noviembre quince de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco, por los CC. Justo Díaz del Castillo, Rafael Ricalde y Amado Balazar, contra el jefe político de San Juan Bautista, que los condenó correccionalmente á quince días de prision.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

C. Juez:

El fiscal dice: El auto del día dos de este mes asienta, que el caso de los quejosos no se halla comprendido en la fracción 1^a del artículo 1^o de la ley orgánica de 1^o de Enero de 1869.

En cumplimiento, sin embargo de la ley citada, el fiscal viene hoy á emitir su parecer, en cuanto al recurso de amparo, reproduciendo ante todo el pedimento núm. 874 que se halla á fojas 3.

El C. Lorenzo Ponz, que funciona de jefe político, dice de un modo vago, que los quejosos concurrían á juntas que clandestinamente se celebraban con el objeto de trastornar el orden público; por lo que, autorizado por el ejecutivo del Estado, y conforme al artículo 20 de la ley de 13 de Noviembre de 1852, les aplicó quince días de arresto.

Esa ley, además de ser inconstitucional, está expresamente derogada en la parte en que hace referencia de los que turban la tranquilidad pública, por la suprema ley de 6 de Diciembre de 1856, en que se establece terminantemente en el artículo el fuero privativo de la justicia federal para conocer de los delitos de que trata la misma ley.

Observe el C. juez que las reuniones sospechosas á que se contrae el C. Ponz, son las de los diputados que' aprisionados, fueron consignados á la justicia federal, con la nota de presuntos reos del delito de abrogacion del poder público. ¿Por qué no fueron igualmente consignados estos ciudadanos? A haberlo sido, tal vez se hallarían en libertad como los CC. Justo F. Santa Anna y Arcadio Zentella, que el fiscal los tiene por libres sin duda por disposicion del juzgado.

El fiscal, por tanto, considera que los quejosos han sido juzgados por autoridad incompetente y contra las prescripciones de los artículos 16 y 21 de la Constitución federal; comprendido por tanto en las fracciones 1^a y 3^a del artículo 1^o de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, y por lo que pide se les ampare y proteja y se les ponga en inmediata libertad.

San Juan Bautista, Octubre seis de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. P. Rosado.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Juan Bautista, Octubre siete de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos: con lo pedido por la fiscalía y considerando: que si bien por el auto de dos del corriente se declara que el caso del presente juicio no pertenece á la fracción 1^a art. 1^o de la ley del 20 de Enero de 1869, esto no ha sido prejuzgar la cuestion, supuesto que aquel concepto bien podia reformarse en definitiva con vista de nuevos